



Sin dinero de EU no hay ayuda de México: Ebrard

(J. Jesús Esquivel, pág. 14-16)

A más de un año de que México le hiciera el trabajo sucio a Donald Trump en materia migratoria, bajo amenazas arancelarias, la realidad ahora coloca a Estados Unidos en desventaja, ya que le urge la ayuda del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Necesitamos que la administración del presidente Joe Biden haga un esfuerzo importante de inversión en la zona sur de México, El Salvador, Guatemala y sobre todo en Honduras. Sólo así podremos colaborar”, dice a Proceso el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Contrario a lo especulado, cuando en la semana última una misión de funcionarios de la Casa Blanca visitó la Cancillería, no hubo quid pro quo de parte del gobierno de López Obrador para hacerse cargo de la migración centroamericana a cambio de vacunas contra el covid-19.

Biden, quien reemplazó a Trump y modificó las políticas migratorias, de garrotazo por ayuda, develó en conferencia de prensa del jueves 25 que, aunque se lo han pedido, el gobierno mexicano no está aceptando a todos los centroamericanos deportados.

“Estamos en negociaciones con el presidente de México, y creo que vamos a ver un cambio en eso; todos los migrantes deben ser regresados, todos. Las únicas personas que no vamos a aceptar que estén sentados al otro lado del río Grande son los niños”, aceptó Biden en ese mensaje realizado en la Casa Blanca.

Ebrard asegura que nada detendrá el peregrinaje de los migrantes mientras no se recupere la economía de las tres naciones centroamericanas, en especial la de Honduras, y que, si Estados Unidos desea la ayuda de México, lo que tiene que hacer es muy sencillo: meterle dinero.

“En este caso, como a ellos (Estados Unidos) les importa mucho este tema, creo que hay posibilidades de lograrlo. A los cuatro mil millones de dólares (propuestos por Biden) habrá que combinarlos con otros recursos y eso puede ser el inicio de otra etapa de colaboración”, expone el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

A la delegación estadounidense que el martes 23 acudió a la Cancillería, integrada por Roberta Jacobson, Juan González y Ricardo Zúñiga, el gobierno mexicano les presentó dos propuestas de inversión: The Comprehensive Development Plan (El Plan Integral de Desarrollo) y la otra es de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid).



Hambre y hacinamiento en el sur

(Isaín Mandujano, pág. 20-22)

Tuxtla Gutiérrez, Chis.— El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, conformado por varias organizaciones civiles, condenó este sábado las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran migrantes en los distintos albergues de la frontera sur y llamó hoy a poner fin a estas situación y otras “prácticas ilegales”.

Señaló que la situación actual de más de 300 personas, en su mayoría familias conformadas por mujeres con niñas, niños y adolescentes (NNA), detenidas en la bodega acondicionada como Estación Migratoria Cupape II La Mosca, en el municipio de Chiapa de Corzo, revela las consecuencias del reforzamiento del operativo de control migratorio y el cierre de fronteras anunciados el pasado jueves 18 de marzo por el gobierno mexicano ante la presión de Estados Unidos por contener el tránsito de personas migrantes y solicitantes de protección internacional.

El Colectivo recordó que la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNN) señala que en ningún momento las niñas, niños o adolescentes migrantes, independientemente de que viajen o no en compañía de una persona adulta, serán privados de la libertad en estaciones migratorias o en cualquier otro centro de detención.

Pese a ello, actualmente cerca de 329 personas, muchas de ellas mujeres con sus hijas e hijos, se encuentran privadas de la libertad, por lo que solicitó darles atención y protección inmediata de la Procuraduría Federal de Protección y del Sistema DIF Estatal y Municipal.

Al Colectivo le preocupa el hacinamiento en que se encuentran, en completa contradicción con las medidas sanitarias a nivel federal de prevención del covid-19 y que, en el caso de la Estación Migratoria de La Mosca, profundiza las graves condiciones de alimentación, salud y bienestar que se han denunciado desde su apertura en 2019.

“Es importante resaltar que la situación de las personas privadas de la libertad en La Mosca es similar a la vivida por quienes se encuentran detenidas en la Estación Migratoria Cupape I en Tuxtla Gutiérrez. A partir de la información de periodistas y medios de comunicación se ha denunciado el hacinamiento, la detención prolongada, la falta de información, precaria alimentación y condiciones sanitarias de mujeres, niñas, niños, adolescentes y hombres”, dijo el Colectivo.

Recordó que organizaciones de la sociedad civil y albergues han documentado la detención en Estaciones Migratorias de NNA y sus familias por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) en coordinación con otras fuerzas de seguridad a pesar de que es una práctica ilegal.



También existen reportes de personas que no son encontradas en los registros de las estaciones a pesar de permanecer ahí por tiempo prolongado, la separación de familias y deportaciones masivas sin estudios individualizados de casos ni respeto al Interés Superior de la Niñez en contra de lo estipulado en la propia ley.

Además, dijeron que han documentado el rechazo de personas solicitantes de refugio, sobre todo de grupos familiares, por autoridades migratorias en el punto de internación puente Rodolfo Robles, en el municipio de Suchiate, frontera con Tecún Umán, Guatemala.

Asegura que ha quedado en evidencia la ausencia de protocolos de actuación y coordinación interinstitucional apegados a la reglamentación de leyes y reformas que se han promulgado progresivamente en los últimos años, lo que deja en total desprotección a la población en movilidad. Conllevando, a su vez, a la presión sobre albergues y organizaciones para asumir responsabilidades que corresponden al Estado de alojamiento y protección.

El Colectivo de Observación lo integran, entre otros organismos, el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, el Centro de Derechos Humanos Tepeyac, Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Formación y Capacitación (FOCA), Iniciativas para el Desarrollo Humano, Kaltsilaltik, Red Jesuita con Migrantes y una decenas más de organizaciones civiles.

La crisis de los albergues saturados

(Patricia Myorga, pág. 17-20)

Ciudad Juárez, Chih.—“¿Cómo vamos a extrañar un país delincuente que hay allá?”, dice Diego en México ante el puente internacional Paso del Norte, a unos días de ser expulsado de Estados Unidos junto con sus padres y cuatro hermanos.

De 15 años, Diego —su verdadero nombre se oculta por motivos de seguridad— vive frustrado el sueño de cruzar hacia Estados Unidos; a diferencia de él, cientos de menores de edad viajan y cruzan solos, lejos de sus familias, en el contexto de una nueva crisis migratoria agravada por la pandemia de covid-19.*

De acuerdo con el jefe del Módulo para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes migrantes del DIF del estado de Chihuahua, José Alfredo Villa, en este 2021 se han disparado los casos de menores no acompañados que cruzaron hacia territorio estadounidense y fueron expulsados de ese país; el año pasado 180 menores de edad centroamericanos no acompañados fueron deportados en Ciudad Juárez y en menos de tres meses de este 2021 ya suman 100 los casos



Si bien 2020 cerró con 700 menores de edad mexicanos repatriados, al cierre del primer trimestre de 2021 van 500 casos; la mayoría proviene de Guerrero y Chiapas.

Desde octubre último, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos documentó un incremento de 114% en las deportaciones de menores de edad que viajan solos, cuando en cinco meses registraron 29 mil 729 casos; en contraste, en 12 meses del ejercicio fiscal anterior la suma total de los reportes fue de 33 mil 239.

Desde hace una semana, el área de Atención a Migrantes de la Comisión Estatal de Población (Coespo) recibe diariamente entre 130 y 200 personas deportadas diariamente en grupos en el puente internacional Paso del Norte y entre 50 y 150 todos los días desde marzo por el puente internacional Palomas, en el municipio de Ascensión.

Diego viaja con sus hermanos de 18, 10, cinco y dos años. La familia decidió huir de Honduras cuando a su papá le die-ron 12 balazos en un asalto. El señor sobrevivió y muestra una de las heridas que lleva en el vientre, con una sonda para evitar que se le infecte.

“El sueño de nosotros es llegar allá”, dice el adolescente al tiempo que mira ha-cia la ciudad de El Paso, Texas. “Me gusta-ría estudiar para ser ingeniero o abogado”.

Este joven cuenta que tuvo que dejar la escuela porque todos los días era golpeado y la policía nunca hizo nada.

“Teníamos amigos, nos llevábamos bien, jugábamos y no teníamos ningún vicio. Pero ahora ya todos ellos se metieron al vicio. Ahora nosotros queremos una vida mejor”, agrega Diego.

A esta familia migrante le gusta Ciudad Juárez, ven la urbe fronteriza como una opción para quedarse, aunque también saben que no será fácil. Lo que tienen claro es que a Honduras ya no regresarán.

El padre de Diego asegura que su carácter es de una persona calmada. “Fui agredido como no se imagina. Lo que que-remos es conseguir un lugarcito dónde estar y trabajar”.

En otro sitio, también frente al puente internacional Paso del Norte, está Monse, una niña de cuatro años que abraza a su joven madre que no para de llorar. Vienen de Guatemala. “Tuve que escapar para salvar a mi hija. La quisieron matar porque no les pagué 25 mil quetzales”.

En el albergue Pan de Vida, en una de las colonias más marginadas de la ciudad y desde donde se ve El Paso, viven varias familias centroamericanas.



El encargado de este lugar, Ismael Martínez, cuenta a esta reportera que apenas el jueves 25 un grupo de 85 migrantes logró ingresar a Estados Unidos después de dos años de procesos jurídicos.

Pan de Vida tiene áreas deportivas, de juego y casas comunales alrededor; aquí conviven decenas de familias guatemaltecas y hondureñas que llegaron hace una semana. Algunas de ellas ya no quieren saber nada de Estados Unidos.

“Nos atraparon, nos encerraron y luego nos enviaron a México. No conocemos aquí y nos trajeron para este albergue. Íbamos 15 en el grupo, pero sólo nos regresaron a tres; los demás eran menores de edad que se quedaron porque iban solos, eran como 10”, relata Imelda, una joven de Guatemala que viaja con su hijo de seis años.

El director de la Coespo, Enrique Valenzuela, hace un llamado a los migrantes para que en estos momentos no viajen. Les dice que, además de los peligros de seguridad, está el del covid-19, porque ningún país ha logrado contener la enfermedad. La frontera está cerrada y no hay solicitudes de asilo.

Ofelia Primero e Ingris Chac, de Guatemala, e Irma, de Honduras, están decididas a aguantar el tiempo que sea necesario para pasar a Estados Unidos en busca de una mejor vida para sus hijos.

Ingris requiere atención médica para su hijo de un año y ocho meses que sufre un problema de la columna, Ofelia desea que sus hijos no crezcan en un ambiente violento e Irma no puede regresar porque está amenazada de muerte por su pareja, con quien vivió una relación de violencia extrema

Más poder... sin rendir cuentas

(Patricia Dávila, pág. 6-10)

El presidente Andrés Manuel López Obrador obstaculiza la reforma que obligaría al Ejército y a la Marina a rendir cuentas sobre los recursos cada vez mayores que les son asignados.

Sin control alguno de fiscalización, las Fuerzas Armadas han aceptado el papel que les ha asignado el presidente: innecesarias militarmente y convertidas definitivamente en una Guardia Nacional.

Así lo considera Mónica Serrano, investigadora de El Colegio de México, luego de sesiones de trabajo con un grupo de militares retirados, en un seminario de esa casa de estudios.



Interrumpida por la pandemia, la revisión conjunta impulsada por Serrano, estudiosa durante más de dos décadas de la relación entre civiles y militares en México, partió del cambio radical del presidente López Obrador frente a los militares respecto de lo que dijo durante su campaña presidencial, cuando prometió regresarlos a sus cuarteles después de dos sexenios de estar al frente de tareas de seguridad y combate al narcotráfico.

Comenta que el presidente fue conquistado por la “sumisión” y “obediencia ciega” que le muestran los soldados y los marinos. Con esta actitud, el mandatario obstaculiza la reforma que obligaría a las Fuerzas Armadas a rendir cuentas, y hoy les asigna múltiples tareas que no corresponden a la seguridad, dice la investigadora.

López Obrador diversifica las tareas de las Fuerzas Armadas ocupando la mano de obra calificada que poseen y las presenta como el único instrumento para eliminar la “corrupción” que en otros sexenios benefició a grandes grupos constructores.

Sin embargo, por la falta de rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas, el presidente está provocando que esa corrupción ocurra dentro de las corporaciones militares, como ya ha sucedido, indica.

Hoy las Fuerzas Armadas, convertidas en Guardia Nacional, se ocupan de labores de seguridad pública, pero también de tareas de migración, control de puertos, la construcción de un tramo del Tren Maya, del aeropuerto de Santa Lucía, de cuarteles para la Guardia Nacional y de los Bancos del Bienestar; a su vez reparten vacunas contra el covid-19 y distribuyen libros de texto, entre otras funciones.

No sólo es la asignación de tareas, sino también el usufructo de esas obras. A la decisión de entregar los beneficios económicos del aeropuerto Felipe Ángeles, el presidente determinó que los recursos que se obtengan del Tren Maya ya no pasarán por la Secretaría de Hacienda, sino que irán directamente para el Ejército y los cerca de mil 500 kilómetros de ferrocarril serán patrimonio de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La cesión de obras y tareas a las Fuerzas Armadas ha causado tanta polémica que, por ejemplo, Javier Jiménez Espriú renunció como secretario de Comunicaciones y Transportes en desacuerdo por la asignación que el Ejecutivo hizo a la Semar de encargarse de los puertos del país; y el actual titular de esa secretaría, Jorge Arganis Díaz Leal, expresó el mismo malestar durante su participación en la conferencia “130 años de la SCT, 65 años de Vivencias” (cuyo video salió de circulación), en donde dijo además que los ingenieros civiles –y no los ingenieros militares– son quienes deben realizar las obras.



“A lo mejor me corren por eso, porque ahora están de moda los ingenieros militares”, agregó Díaz Leal el lunes 22.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2317 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.